

Dificultades para salir de la crisis

CARMEN ALCAIDE

EL PAÍS - NEGOCIOS - 15-02-2009

Una de las preguntas más corrientes de estos días no es tanto cuándo podremos salir de la crisis por la consabida dificultad de hacer este pronóstico, por su complejidad y por ser diferente de todas las sufridas hasta ahora, sino cómo podremos hacerlo en las mejores condiciones. Está claro que no es posible seguir con el modelo de crecimiento seguido durante la anterior fase expansiva, basado fundamentalmente en el boom de la construcción, en los excesos de gasto públicos y privados cometidos en torno a este fenómeno y en los beneficios exagerados y a veces ilegales generados por el mismo.

En primer lugar, desde el punto de vista de la demanda agregada, el consumo de los hogares, que como es sabido supone el 56% de la demanda total, se recuperará cuando mejoren las circunstancias generales de las rentas de las familias y especialmente el empleo. Las ayudas ofrecidas hasta ahora alivian la situación de algunas familias, pero no llegan a todas, especialmente las que están fuera del sistema y no tienen derecho al subsidio. Por lo tanto, aunque es cierto que la moderación de precios mejora la renta disponible de las familias, la recuperación de la confianza y del consumo será más una consecuencia que no el motor de la recuperación. El consumo público -Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, equivalente al 18,3% del PIB- seguirá aportando crecimiento aunque con tasas más moderadas que en el pasado.

En la demanda de inversión (31,2% del PIB), el sector inmobiliario tardará en recuperarse ya que aunque con tipos de interés y precios más bajos la compra de viviendas inicie su recuperación, deberá absorberse todo el exceso de oferta que hay actualmente sin vender. La inversión en infraestructuras continúa fuerte en transporte ferroviario. Pero existen parcelas de la inversión pública, como la distribución de agua, en la que queda mucho por hacer. En cuanto a las pequeñas inversiones de los ayuntamientos, con el nuevo plan de ayudas, se dedican a su propia infraestructura (fuentes, polideportivos, etcétera) y pecan de poca o nula productividad para el futuro. En la demanda de inversión privada en bienes de equipo tendrá que recuperarse la confianza de los inversores: maquinaria, aparatos informáticos... Aquí sí podrían instrumentarse medidas que facilitasen y animasen la inversión privada, ya que ayudaría al incremento de la productividad y la competitividad de los productos españoles en el mercado global en el que estamos inmersos.

Pero es desde el lado de la oferta donde la estructura productiva de España tiene que sufrir una mayor transformación como consecuencia de esta crisis. Los servicios soportan el peso más importante (60,4% del PIB). En ellos se incluyen los servicios públicos no de mercado - enseñanza y sanidad (13%)-, con un carácter muy estable y de crecimiento continuo como consecuencia del aumento de la población. Además, incluye otros servicios de las administraciones públicas también con tendencia creciente. En los servicios de mercado (47,3% del PIB), es decir, aquellos que están a la venta, se incluyen el comercio, el transporte, la hostelería y los servicios a las empresas. Hay parte de ellos que agrupados conocemos como sector turístico, que tiene la ventaja de aportar un saldo positivo a nuestra debilitada posición de la balanza de pagos con el exterior. En el sector turístico somos competitivos porque

tenemos sol y playas y porque disponemos de una oferta hotelera de gran capacidad que todavía no han alcanzado muchos de nuestros competidores. Además, estamos mejorando en ofertas turísticas de mayor calidad y diversidad.

Sin duda, todos los sectores relacionados con el turismo deberían cuidarse y modernizarse porque es una de las pocas parcelas competitivas de gran dimensión de la estructura productiva española. Medir cuánto significa el turismo en su conjunto en términos del PIB no es fácil. Los intentos estimativos de la cuenta satélite del turismo elaborada por el INE lo valoran en un 10,7 % del PIB, pero es imposible medir la parte de economía sumergida que lo rodea y que sin embargo aporta empleos y renta a este sector.

Pero ¿qué ocurre con la industria? A través de las décadas ha ido perdiendo peso (del 16,6% del PIB en 1995 al 13,4% actual) y en los últimos años -aparte de la energía, la industria transformadora de alimentos y la industria química- prácticamente ha funcionado con las industrias auxiliares de la construcción y del automóvil: acero, cemento, cerámica, productos sanitarios, pequeña maquinaria eléctrica y mecánica, electrodomésticos, muebles, etcétera. Sólo ha crecido exageradamente la construcción, que como sabemos es un sector a reconvertir a una dimensión adecuada a las necesidades reales de la demanda. Por lo tanto, todas las industrias auxiliares de la construcción deberán ajustarse a esa nueva dimensión y las que sobrevivan sólo podrán aspirar a un crecimiento moderado. Otra cosa son las auxiliares del automóvil, que dependerán más de la demanda global europea, de las decisiones de las casas matriz y de las facilidades de financiación y posibles ayudas para la compra de automóviles.

En cuanto a la agricultura, ya se ha ajustado durante estos años con las ayudas comunitarias. Coexiste una agricultura productiva de carácter temprano, con ventajas competitivas respecto al resto de países de la UE, pero a la que cada vez le salen más competidores (ahora en invierno podemos comprar fresas, cerezas y melocotones provenientes de Chile). La agricultura que tenemos hay que cuidarla, pero, por su dimensión (2,6% del PIB), indudablemente no puede ser un soporte de la economía española futura.

Por lo tanto, es cierto que la crisis actual obliga a ajustarse desde todos los puntos de vista. Pero hay que buscar las oportunidades y mejorar, ya que lo único que puede compensar el ajuste de la demanda interna son las exportaciones, ya sean de bienes o de servicios. Por eso desde el sector público debería estudiarse a fondo en dónde inciden los mayores costes que impiden tener una mayor competitividad (costes administrativos, financieros, de seguridad social y fiscales) y cómo se puede incentivar la inversión privada para aumentar la competitividad sin que sea necesariamente con la actual reducción de empleos.